

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.

VISTO Y OIDOS:

En los antecedentes RUC N°1900905390-8, RIT N° 98-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, se dictó sentencia el cuatro de junio de dos mil veintiuno, por la que se condenó al acusado **GERARDO ANTONIO BRITO SEPÚLVEDA**, a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales, multa de un tercio (1/3) de unidad tributaria mensual (UTM), sin costas, por su responsabilidad como autor del delito de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, en grado de consumado, cometido el día 22 de agosto de 2019, en la comuna de Concón, sanción corporal sustituida por la pena de libertad vigilada.

En contra del referido fallo la defensa del sentenciado interpuso recurso de nulidad, siendo éste conocido en la audiencia pública de cuatro de febrero último y luego de la vista se citó a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada en su oportunidad.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de nulidad deducido en autos se sustenta únicamente en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiera infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”*, todo en relación con lo establecido en los artículos 5° inciso 2°, 19 N° 3 y N° 7 de la Constitución Política de la República; 8.2 letra g) y 11 N° 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.3 letra g) y 17 del



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 83, 84 y 85 del Código Procesal Penal. En específico, la impugnante refiere como conculcada la garantía del derecho al debido proceso, además del derecho a la libertad ambulatoria, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.

Expresa que dichas garantías se infringieron sustancialmente al practicarse un control de identidad y registro del acusado sin que existiera indicio que lo permitiera, obteniendo evidencias incriminatorias en su contra.

Arguye que tal control de identidad fue producto de que el personal policial lo vio realizando un traspaso de objetos y un billete de baja denominación, y en el registro que se le hizo, se le encontró droga en una bolsa, sin que en la descripción que realizan los funcionarios policiales, que lo observado indique que haya cometido un crimen, simple delito o falta, y sumar que inclusive los propios funcionarios al ser interrogados por la defensa dijeron que lo observado, el traspaso de dinero y el papel cuadriculado no podían asegurar que era delito

Agrega que de ello aparecería de manifiesto que el actuar policial no se ajustaría a los requerimientos del artículo 85 del Código Procesal Penal, norma destinada a proteger el derecho a la intimidad y a la libertad ambulatoria, dado que en este caso el control de identidad se funda en el ejercer el comercio ambulante y a lo que habilita es a multarlo, requisar especies, sin perjuicio que se debe requisar sus especies, las que porte u ofrezca, pero en ningún momento se señaló que el acusado tuviese esa bolsa, o que la tirara al ver la presencia policial, es más, nunca la vieron manipular por él, lo que revela un atropello a las normas legales que orientan el proceder policial como asimismo a sus garantías y derechos que la Constitución Política reconoce y garantiza, y que el traspaso de objetos no es indicio de falta, simple delito o crimen, tal como lo expusieron los propios Carabineros que tomaron el procedimiento.



Por ello, pidió declarar la nulidad del juicio oral y la sentencia, por infracción sustancial de derechos y garantías asegurados por la Constitución o Tratados Internacionales ratificados por Chile, ordenando la exclusión de toda la prueba obtenida en el procedimiento de detención del acusado de fecha 12 de julio de 2019.

SEGUNDO: Que el hecho que se ha tenido por establecido por los sentenciadores del grado, en el motivo octavo de la sentencia que se impugna, es el siguiente:

“El día 22 de Agosto de 2019 alrededor de las 18:40 horas, Gerardo Antonio Brito Sepúlveda, se encontraba en el sector de la intersección de calle Concón Reñaca Oriente con calle Terravista, comuna de Concón, entregándole a un tercero no identificado unos envoltorios, presumiblemente contenedores de droga, a cambio de dinero; siendo sorprendido en dicha conducta por personal de Carabineros, momento en que el comprador no identificado se dio a la fuga y el acusado Brito Sepúlveda arrojó al suelo una funda de cuero color café, intentando darse a la fuga, siendo retenido por los funcionarios policiales, quienes le efectuaron un control de identidad, al tiempo que revisaban el objeto lanzado al piso por el acusado, correspondiente a una funda de cuero con una bolsa de plástico transparente, contenedora de 54 envoltorios de papel cuadriculado con 2,6 gramos netos de cocaína base en su interior. Además, entre sus vestimentas, el acusado mantenía la suma de \$4.500 pesos en dinero efectivo. La droga que el acusado Gerardo Antonio Brito Sepúlveda mantenía en su poder, estaba destinada para su comercialización y/o transferencia a terceros, sin justificar de forma alguna que estuviera destinada a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.”



TERCERO: Que, corresponde puntualizar que en el considerando décimo del fallo impugnado, los juzgadores del grado tuvieron presente para adoptar su decisión, la declaración de funcionarios de Carabineros que intervinieron directamente en el procedimiento, Abraham Nimsi Vera Pavez y Sebastián Alejandro San Martín Yáñez, quienes aportaron un relato claro y conteste dando cuenta del contexto en que se produjo el descubrimiento del hecho ilícito y el procedimiento adoptado a base de ello.

A partir de tales atestados, los sentenciadores del Tribunal Oral en lo Penal concluyeron, en el motivo décimo quinto, que la prueba incorporada no habría sido obtenida con infracción de garantías fundamentales en el control de identidad practicado al recurrente –del cual derivó su detención- y tampoco constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Para fundar tal aseveración, explicaron en el antes referido considerando que:

“(…) Previo a entrar al análisis de las facultades que confiere la disposición legal citada, es menester hacerse cargo de la afirmación expuesta por la defensa, del todo errada y temeraria. Tal como consta de la transcripción de las declaraciones de ambos efectivos de Carabineros, ellos contestaron, a las preguntas sugestivas de la defensa, en el marco del contrainterrogatorio, que efectivamente, al momento de advertir la conducta desplegada inicialmente por los dos sujetos, ellos no podían asegurar que se estaba cometiendo algún delito, jamás afirmaron que “ese comportamiento no era delito”, salvo cuando se les podía en hipótesis tales como el traspaso de “perejil o tabaco”. Resulta evidente que la constatación de un actuar ilícito solo puede concluirse una vez analizada la sustancia incautada, lo que ocurrió momentos después, en la 4ª Comisaría de Carabineros. Ningún carabinero -o persona alguna- podría aventurar una



afirmación como la que sugiere la Defensa con la mera apreciación visual del hecho que describe la acusación. Por lo mismo es que, el legislador utiliza una terminología condicional en la redacción de la norma aplicable en la especie y que reseñaremos a continuación. Improcedente resulta, además, que la Defensa pretenda privar a los sentenciadores de su deber de analizar y ponderar la prueba sobre la base de una respuesta como las otorgadas a preguntas sugestivas, desde que ello coarta el deber básico de todo tribunal, a quien le está entregada la facultad de juzgamiento de las conductas que merecieren -en su caso- un reproche penal.

Ahora bien, se debe tener en consideración que el artículo 85 del Código Procesal Penal, permite que los funcionarios policiales “soliciten la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existe algún indicio de que hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo....” . Esta norma del artículo 85, a través de sus variadas modificaciones ha ido depurando el sentido lógico que posee esta facultad de actuación autónoma y que se relaciona con las funciones propias de la Policía en torno a la prevención de la comisión de delitos y el resguardo del orden público y seguridad pública interior. Por ello, siendo efectivamente indispensable que existiere algún indicio de que aquel hubiere cometido o se dispusiere a cometer un ilícito (crimen, simple delito o falta), la ley también prevé que habrá de tenerse en consideración el contexto circunstancial en que se desempeña el agente(...)

En este caso, justamente, y tal como afirmaron ambos funcionarios policiales concurrentes a la audiencia, existía fundamento para controlar al imputado, pues evidentemente, la conducta advertida de manera preliminar -el traspaso a un segundo sujeto de envoltorios de papel y la recepción de dinero por



ellos-, unida a las acciones desplegadas ante la simple visualización del personal policial que se desplazaba por el sector y que se aprestaba a acercarse a ambos individuos y arrojar en la huida un objeto al suelo, acorde las circunstancias, podía ser considerado, a la luz de las máximas de la experiencia y el conocimiento policial, como una sospecha cierta de que el sujeto en cuestión estaba cometiendo algún ilícito y, en consecuencia, había mérito suficiente para interceptarlo, impedir su fuga y, consecuentemente, proceder a su revisión personal y, como no, del elemento del que se había desprendido de manera tan apresurada. Y es en el marco de esta actividad que los efectivos de Carabineros descubren que el objeto arrojado correspondía a un cartuchero o contenedor de cuero y que dentro de él mantenía 54 envoltorios de una sustancia dubitada como droga y que resultó ser cocaína base, produciéndose, la detección de un delito en situación de flagrancia, por lo cual, desde luego, y tal como prosigue el inciso segundo del artículo 85 en comento, era factible detener al sujeto que, en ese momento, ejecutaba algunas de las acciones ilícitas que previene la ley 20.000, cual es la “transferencia” y el “porte y transporte” de una sustancia psicotrópica o estupefaciente, que se encontraba, por tanto, en la situación de flagrancia descrita en la letra a) del artículo 130 del Código Procesal Penal.

De allí que ninguna infracción existió en el proceder de la Policía que, como se ha dicho, actuó sobre la base de indicios objetivos, que le facultaban para realizar el control de identidad del acusado y, consecuentemente, y estando en presencia de una situación de flagrancia, proceder a su aprehensión.

En este sentido, cabe también tener en consideración que, el Código Procesal Penal regula, en su articulado, varias de las funciones de la Policía en relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones, conciliando su eficacia con el respeto a



los derechos de las personas, para cuyo efecto el artículo 83 del Código Procesal Penal compele a practicar la detención solo en casos de flagrancia, situación que puede generarse con ocasión de un control de identidad(...)

Enseguida, la Defensa reclama que los hechos no fueron probados, que los testigos resultaron contradictorios y que, además faltaron a la buena fe procesal, llegando a dudar de la existencia del segundo sujeto del que se da cuenta en la acusación.

Convengamos, primeramente, que la Defensa ni siquiera esbozó una teoría propia del caso, por lo que la versión aportada por los efectivos de Carabineros no puede ser contrastada con ninguna otra opción. Por ende, se trata únicamente de la credibilidad que emana de sus dichos. Y el Tribunal ha considerado, tras el análisis valorativo pertinente, que ellos fueron creíbles, que dieron una cuenta acabada y razonable de sus actuaciones y del suceso que advirtieron, no existiendo ningún elemento de duda que haya podido interponerse a su valoración, salvo la mera negación de la Defensa, carente de todo sostén probatorio.

Ciertamente los funcionarios aludieron a que los hechos se desarrollaban no en la intersección de calles en sí misma, sino que en el sector aledaño, y ellos además de parecer ajustado a las máximas de la experiencia, también se ajusta al contenido de la acusación, desde que se indica en la misma una ubicación que permite fijar espacialmente los hechos. El lugar descrito por los deponentes se ubica a no más de 50 metros de la intersección, y no se avizora qué impacto podría tener aquello en la corroboración fáctica, si no se posee una teoría alternativa que hiciera relevante ese eventual desfase territorial (que no es superior, se ha dicho, a los 50 metros). En cuanto a la alegación de la contradictoriedad y la infracción al principio de la buena fe procesal, el Tribunal no



advirtió tales contradicciones, al menos no de la gravedad suficiente como para negarle valor probatorio a alguno o a todos los declarantes. Que establecido en forma prístina que tanto el Cabo Vera como el Cabo San Martín fueron los funcionarios que intervinieron en el procedimiento y es plausible que existan algunas diferencias en cuanto a la perspectiva personal -es por eso que San Martín admitió haber visto solo parte de la transacción y no toda ella, por encontrarse circulando detrás del Cabo Vera, quien sí tuvo acceso visual completo- y la circunstancia de haber buscado o no al segundo sujeto en forma posterior no posee relevancia alguna en torno a la acreditación del hecho, no siendo suficiente denegar mérito probatorio a los testigos por la mera circunstancia de no haber detenido a dicha persona y haber optado por asegurar la aprehensión del acusado Brito. Y en lo relativo a la eventual falta de buena fe, si bien la Defensa intentó incidentar al respecto, luego se desistió de dicha pretensión, habiendo el Tribunal adoptado las medidas a su alcance para verificar que, al momento de declarar cada testigo, se encontrara solo en la dependencia respectiva, lo que así ocurrió. Por lo demás, habida consideración que ambos testigos intervinieron en forma similar en el procedimiento, tampoco se avizora una afectación mayor al derecho a defensa, ni ello fue explicitado por dicho interviniente.”

CUARTO: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N° 3 inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso



lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

QUINTO: Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.

SEXTO: Que, con respecto a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

SÉPTIMO: Que, como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los



representantes del Ministerio Público o de los jueces (*Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019; N° 2.895-20, de 04 de marzo de dos mil veinte*).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su



identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 *-que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia-* así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

OCTAVO: Que, las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado *-y sometido a control jurisdiccional-* en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

NOVENO: Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por los jueces que dictaron el fallo tildado de nulo, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, puesto que lo contrario implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas



deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que *-a diferencia del a quo-* dirime los hechos a base de meras actas o registros -eso es sino el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo-, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

DÉCIMO: Que resulta relevante para ello, señalar que la sentencia impugnada, en sus motivos noveno y décimo, consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos, consistentes en que el día 22 de agosto de 2019 alrededor de las 18:40 horas, Gerardo Antonio Brito Sepúlveda, se encontraba en el sector de la intersección de calle Concón Reñaca Oriente con calle Terravista, comuna de Concón, entregándole a un tercero no identificado unos envoltorios, presumiblemente contenedores de droga, a cambio de dinero; siendo sorprendido en dicha conducta por personal de Carabineros que efectuaba un servicio motorizado en la población, momento en que el comprador no identificado se dio a la fuga y el acusado Brito Sepúlveda arrojó al suelo una funda de cuero color café, intentando darse a la fuga, siendo retenido por los funcionarios policiales, quienes le efectuaron un control de identidad, al tiempo que revisaban el objeto lanzado al piso por el acusado, correspondiente a una funda de cuero con una bolsa de plástico transparente, contenedora de 54 envoltorios de papel cuadriculado con 2,6 gramos netos de cocaína base en su interior. Además, entre sus vestimentas, el acusado mantenía la suma de \$4.500



pesos en dinero efectivo. La droga que el acusado Gerardo Antonio Brito Sepúlveda mantenía en su poder, estaba destinada para su comercialización y/o transferencia a terceros, sin justificar de forma alguna que estuviera destinada a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Todo ello el tribunal lo tuvo por corroborado con la pericia incorporada, por lo que entendió que dada su coincidencia, coherencia y verosimilitud, con lo que tales hechos quedaron suficientemente demostrados.

UNDÉCIMO: Que en la especie la defensa del encartado ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad a su representado sin que existiera un real indicio para ello, ya que su actividad a lo más sería constitutiva de un comercio ambulante susceptible de sancionar a través de una multa, añadiendo que en este caso tampoco se le vio manipular una bolsa o que la tirara al ver la presencia policial, y que el traspaso de objetos no es indicio de falta, simple delito o crimen, como lo habrían sostenido los carabineros.

Pues bien, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que éstos, conforme se determinó en autos, mientras efectuaban un servicio motorizado en la población en calidad de motociclistas, sorprendieron al enjuiciado en el sector de la intersección de calle Concón Reñaca Oriente con calle Terravista, comuna de Concón, entregándole a un tercero no identificado unos envoltorios, recibiendo dinero a cambio, y tras ello el acusado Brito Sepúlveda arrojó al suelo una funda de cuero color café, intentando evadirse, siendo finalmente retenido por los funcionarios policiales, quienes a raíz de ello efectuaron un control de identidad, revisaron el objeto lanzado al piso por el encartado, una funda de cuero con una



bolsa de plástico transparente contenedora de 54 envoltorios de papel cuadriculado con 2,6 gramos netos de cocaína base en su interior, habiendo sido justo esos funcionarios que declararon en juicio, coincidentes, coherentes y verosímiles pues sus dichos fueron analizados detalladamente justificándolos desde la posición que cada uno de ellos tenía, y cómo percibieron lo que cada uno indicó, lo que resultó corroborado por otras probanzas.

La apreciación de un intercambio de manos entre dos personas en que una entrega unos envoltorios, en tanto que recibe dinero a cambio, sumado a que al advertir la presencia policial huyen en direcciones opuestas y, al perseguir al sentenciado este lanza al suelo algo, justifica la actuación autónoma de la policía al tenor del artículo 85 del Código Procesal Penal, es decir, el control de identidad y la revisión de vestimentas y objetos hecha.

En efecto, en el caso en análisis se trata de una secuencia de acciones y no una aislada, todas indiciarias de una misma actividad, no simplemente de un hecho puntual que pueda confundirse con otro lícito, pues lo que se aprecia es una entrega de especies por las que se recibe como medio de cambio dinero a través de un intercambio de manos habitual en el tráfico de pequeñas cantidades de droga, a lo que se suma que las personas involucradas -al observar que se les acercan funcionarios policiales a bordo de motocicletas- una de ella escapa y la otra arroja al suelo un bolso de cuero de pequeñas dimensiones que resulta justamente contener droga, justifican un escenario que habilita el actuar policial, más si se tiene en cuenta el esperablemente breve espacio de tiempo transcurrido entre la actividad percibida y la captura y hallazgo, pues los policías han indicado cómo se desplazaban, según asentó el tribunal, lo que constituye un indicio que resultaba más que suficiente –grave, de entidad-, para proceder a controlar su identidad, por así disponerlo expresamente el artículo 85 del Código Procesal



Penal, desestimándose, en consecuencia, la ilegalidad denunciada por la recurrente.

Conforme a lo anterior, al encontrarse habilitados los agentes a efectuar un control de identidad, las actuaciones autónomas que éstos desplegaron con posterioridad *–la detención y subsecuente registro–*, mal pueden entenderse viciadas como sostiene el recurrente, máxime si las mismas fueron efectuadas bajo el amparo de lo preceptuado en el artículo 130 del Código Procesal Penal.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19° de la Constitución Política reconoce y garantiza a las personas imputadas, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que no queda sino rechazar el recurso en análisis.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también, a lo establecido en los artículos 372, 373 letra a), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad promovido por la defensa del condenado **Gerardo Antonio Brito Sepúlveda**, en contra de la sentencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 1900905390-8, RIT N° 98-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, los que en consecuencia, no son nulos.

Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Vázquez.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 39.854-2021



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros. Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firman los Ministros Sr. Valderrama, Sra. Letelier y el Ministro Suplente Sr. Vázquez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso los Ministros Sr. Valderrama y Sra. Letelier y por haber concluido su período de suplencia el Ministro Suplente Sr. Vázquez.



En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

